

ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ*

SIMPLIFICAR EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO: ¿SIRVE DE ALGO?

En los últimos tiempos, algunas lecturas del conflicto interno colombiano parecen empeñarse en una visión simplificada, que podría servir para encontrar más fáciles alternativas de solución; pero realmente lo que hacen es formular propuestas para un conflicto que no es. Por ello es necesario retomar su complejidad, su historia y sus transformaciones, para tratar de encontrar, dentro de la complejidad los caminos para su superación.

Algunos elementos históricos

Además de la violencia presente en muchos ámbitos de la vida colombiana, hay un conflicto interno armado que tiene ya casi cuatro décadas de duración. En esto inciden factores de orden estructural, que hunden sus raíces en la configuración histórica del país y que han dado como resultado estructuras socioeconómicas y políticas excluyentes que impiden el ejercicio de la ciudadanía para una buena parte de la población, los cuales diferenciamos de los factores específicos, que se encuentran en la base del surgimiento de las organizaciones guerrilleras, e igualmente de otras causalidades posteriores que han contribuido a su reproducción.

* Doctor en Ciencia Política. Profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.

Desafíos, Bogotá (Colombia), (10): 155-168, semestre I de 2004

Dentro de los primeros se encuentran, además de la persistente tendencia histórica a utilizar la violencia para obtener objetivos políticos, las estructuras de exclusión o 'inclusión perversa', las socioeconómicas, las políticas y las regionales,¹ junto con una cultura política autoritaria refractaria a los comportamientos democráticos, todos los cuales forman una especie de telón de fondo.

Dentro de los segundos, los factores específicos, podemos mencionar los de orden externo (la Guerra Fría y sus influencias con la llamada doctrina de la seguridad nacional, la revolución cubana y la ruptura política chino-soviética), así como los de tipo interno (la democracia restringida del Frente Nacional; el viejo problema agrario no resuelto; la radicalización de sectores de la juventud, especialmente estudiantiles en los años sesenta; los remanentes de las guerrillas liberales de la anterior violencia, y las tendencias al radicalismo político en algunos sectores de la dirigencia sindical, especialmente petrolera).

Posteriormente aparecen otros factores que van a ayudar a la re-

producción del enfrentamiento, el narcotráfico, en primer lugar y, especialmente, los cultivos de uso ilícito, que se vuelven fuentes de rentas para la financiación de la guerra; el colapso del aparato de justicia como elemento de regulación de las conductas sociales; la disparada de la impunidad, y la pérdida de la confianza como valor social de cohesión, conductas delincuenciales y corruptas asociadas con la gestión del Estado.

La anterior es una distinción necesaria frente a la tendencia a pretender, por un lado, explicar el conflicto interno armado exclusivamente por el narcotráfico y a partir de allí derivar a una lectura que implica que la lucha contra el narcotráfico y contra la guerrilla es la misma cosa, sobre todo por razones del uso de la ayuda militar estadounidense, y, por otro, considerar que el conflicto interno armado se resuelve si se logra 'derrotar' al narcotráfico, y con ello pretende diluir la naturaleza específica que conlleva la violencia política expresada en el conflicto interno armado.

El movimiento guerrillero colombiano, con las peculiaridades de las diversas organizaciones, tie-

¹ El texto de Armando Montenegro y Carlos Esteban Posada (*La violencia en Colombia*, Bogotá, Cambio-Alfaomega, 2001) pretende establecer, para posteriormente criticarlo, que hay en los estudios sobre la violencia en Colombia una tendencia a plantear una relación de causalidad directa entre exclusión social y política con la violencia, cuando a nuestro juicio es necesario diferenciar los tres tipos de factores que crean un contexto que propicia la violencia, pero que no significan necesariamente una relación directa.

ne raíces muy profundas en la dinámica interna de las luchas sociales de los sectores populares, y en esa medida, a diferencia de otros conflictos, los factores externos obran más como elementos condicionantes que con un carácter determinante.

El origen de las FARC-EP se remonta a las luchas agrarias de los primeros decenios del siglo XX y, de manera inmediata, a las auto-defensas agrarias campesinas que el Partido Comunista Colombiano, en ese momento, apoyó y estimuló. Un breve recuento de los orígenes de las FARC-EP nos permite situar, como antecedentes remotos, los conflictos agrarios del Sumapaz y del Tequendama en los años veinte y treinta, alrededor de la lucha por la posesión y propiedad de la tierra y por el valor del jornal en la hacienda cafetera. De manera más próxima, encontramos como antecedente la llamada guerra de Villarrica, a finales de la década de los cincuenta, contra las zonas de autodefensa campesina del Sumapaz, en Cundinamarca, y el oriente del Tolima, y que originan las denominadas *columnas de marcha*, que causaron desplazamientos poblacionales masivos y fueron la base de nuevos procesos de colonización en el Ariari y en regiones como El Pato y el fac-

tor generador inmediato de su conformación como grupo guerrillero bajo la denominación inicial de Bloque Sur (se refiere a la ofensiva militar contra las regiones de autodefensa campesina, denominadas por algunos dirigentes políticos como repúblicas independientes de Marquetalia, El Pato, Riochiquito y Guayabero).

En el caso del ELN, su nacimiento se va a ligar de manera mucho más directa con las influencias de la Revolución Cubana en Latinoamérica y, en especial, con el impacto producido por ésta en las juventudes de la región; pero igualmente se articula con luchas nacionalistas (como la de los obreros del petróleo) y de resistencia armada (como las que mantenían los remanentes de las guerrillas liberales en la región del Magdalena Medio) y con la expectativa que crea en sectores colombianos de la llamada *nueva izquierda*,² en el sentido de la posibilidad de realizar revoluciones a partir de la acción revolucionaria armada, combinada con el descontento social.

Es evidente que las guerrillas colombianas son producto de procesos históricos y políticos particulares, pero en todos los casos lograron insertarse más o menos en problemáticas sociales

² Expresión usada para referirse a las organizaciones políticas de izquierda legal (las Juventudes del MRL, MOEC, FUAR) surgidas a comienzo de los años sesenta, influidas por las revoluciones china y cubana y diferentes a la izquierda tradicional expresada en el Partido Comunista.

y regionales que les permitieron consolidarse y reproducirse. Ahí existe asociación entre el conflicto armado y conflictos de orden político y económico que afectan a diversos sectores y regiones de la sociedad colombiana; pero igualmente hay que decir que muy temprano estas organizaciones, buscando fuentes de financiación interna, incurren en prácticas bandoleriles.

En cada uno de estos dos procesos, abierta o implícitamente, va a estar presente una determinada teoría revolucionaria como expresión de una utopía en relación con un tipo de sociedad y una práctica política para lograrla. A partir del decenio de los ochenta vamos a tener cuatro procesos que se van a destacar: uno, las guerrillas históricas que con ritmos diferentes continúan sus procesos de crecimiento y expansión; dos, aparecen en la escena pública los denominados grupos de autodefensas o paramilitares que van, sin duda, a 'enredar' el conflicto armado; tres, se inician los procesos de búsqueda de superación negociada del conflicto interno armado, que crean nuevas polarizaciones asociadas con la presencia simultánea de escenarios de paz y de guerra (situación que se mantiene hasta el presente), y cuarto, el narcotráfico entra a convertirse en un factor que altera e incide sobre el conflicto armado de diversas maneras: potenciando actores como los grupos de autodefensas o

paramilitares; estableciendo relaciones, regionalmente cambiantes, con las organizaciones guerrilleras, y transformándose en una fuente de financiación privilegiada para la guerra y explicación en buena medida de la dimensión que ha tomado el conflicto.

El conflicto interno armado ha venido produciendo de manera creciente profundos efectos negativos sobre la sociedad colombiana, no solamente por las muertes directas en el enfrentamiento militar y los profundos daños sociales y económicos, sino especialmente por los efectos perversos sobre la población civil no vinculada directamente con la lucha armada. Ésta viene siendo objeto de actos violatorios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como los secuestros, las desapariciones forzadas, los homicidios fuera de combate, las extorsiones, las detenciones arbitrarias, el método de la tortura y, crecientemente en los últimos tiempos, el uso de prácticas indiscriminadas de terror asociadas con las masacres, y que han propiciado procesos masivos de desplazamiento poblacional forzado.

¿Cambia la guerra interna colombiana?

La guerra interna colombiana es una guerra de guerrillas, lo cual significa la presencia de

Desafíos, Bogotá (Colombia), (10): 155-168, semestre I de 2004

pequeños grupos de combatientes que utilizan la sorpresa para dar sus golpes y que luego huyen. Pocas veces estos golpes significan enfrentamientos directos con la fuerza pública—sólo cuando ven que hay un desequilibrio que les permite golpear a su adversario con seguridad (toma de pueblos apartados o desprotegidos, por ejemplo)—, de resto se tratan de acciones de sabotaje o de terrorismo sobre la infraestructura económica del país (carreteras, oleoductos, torres de transmisión, etc.) o acciones que afectan a los no combatientes (secuestros, extorsiones, homicidios fuera de combate). En algunas ocasiones, las guerrillas han actuado concentrando fuerzas, lo que algunos denominan *guerra de movimientos* contra unidades importantes de fuerza pública (batallones o patrullas de gran tamaño), pero ésta ha sido la excepción y no la regla. Y en ningún caso han tratado de defender territorios a toda costa, o lo que algunos denominarían mantener zonas liberadas, eso nunca lo ha hecho la guerrilla en Colombia. Es decir, todo el territorio nacional es uno en disputa. Y ésta va a seguir siendo la característica.

En consecuencia, para buscar la superación del enfrentamiento, es fundamental comprender la guerra, por eso es útil hacer un análisis para entender las transformaciones de la guerra interna.

Todo indica que ha entrado en una dinámica de transformaciones, luego de la ruptura del proceso de conversaciones entre el gobierno de Pastrana y las FARC y del inicio del actual gobierno, con sus nuevas estrategias de seguridad democrática. Sin embargo, no es claro el sentido de los cambios y, por supuesto, tampoco hay unanimidad en su interpretación. Por ello plantearemos a continuación algunos ejes en los cuales creemos se están moviendo estas transformaciones y arriesgaremos en algunos casos hipótesis acerca de su sentido.

¿Guerra ampliada y regionalmente diferenciada?

El enfrentamiento armado se ha ampliado, en el sentido de involucrar, además del actor institucional que es la Fuerza Pública, otros actores: varias organizaciones guerrilleras con distintas lógicas y estrategias e, igualmente, varios grupos de autodefensas o paramilitares, en la medida en que éstos son básicamente proyectos regionales diferenciados. Todos ellos han estado preparándose militarmente para tratar de ganar una mayor preponderancia en este campo, lo cual da como resultado neto un escalamiento de la lucha militar. Se trata, entonces, de varias guerras regionales, con especificidades, que por momentos dan la sen-

sación de una sola guerra nacional.

¿Guerra bipolar o multipolar?

Para precisar mejor el sentido del enfrentamiento militar colombiano hay que definir quiénes son los actores, porque si se está en guerra es contra actores concretos, no contra fantasmas: FARC, ELN, otras guerrillas, grupo(s) paramilitar(es), Fuerzas Armadas, Policía Nacional... Esta precisión permite clarificar si se trata de una lucha bipolar o si, por el contrario, estamos frente a una de tipo multipolar. ¿Hay campos definidos de aliados o se trata de enfrentamientos entrecruzados de múltiples protagonistas?

¿Guerras por controlar la población o el territorio y sus recursos?

Todo indica que esta guerra interna, antes que el 'control' de la población, que podría definir un enfrentamiento más típicamente político, da prioridad al 'control' del territorio y sus recursos (mineros, energéticos o zonas de cultivos de uso ilícito) o, para ser más preciso, actuar como poder paralelo en ellos, lo cual coloca el aspecto militar o coercitivo en el comando y se supone que indirectamente esto origina un control sobre la población.

¿La 'gran batalla' o guerra de desgaste?

Algunos consideraban que vendría una medición de fuerza total; que llegaba el momento en que la guerrilla, especialmente las FARC, iba a mostrar lo que tenía acumulado, y que se acercaba la 'gran batalla', que definiría de manera definitiva el curso del enfrentamiento armado. Con esta interpretación algunos, incluso en las Fuerzas Armadas, consideraban que se venía una guerra de grandes proporciones, pero de corto tiempo, y que al final quedaría definido un nuevo balance de fuerzas militares.

Pero la guerrilla colombiana se ha movido en los últimos años más en la lógica de la llamada *guerra popular prolongada* y no parece haber por el momento cambios importantes. Esto quiere decir que sus tiempos se mueven en el mediano y largo plazo y su acción apunta a conservar y acumular sus fuerzas —cuantitativa y cualitativamente—. El recurso clásico a los métodos de la guerra de guerrillas se va a mantener: operar con pequeñas o medianas unidades; rehuir el combate cuando consideran que el adversario es más fuerte o está mejor preparado; tratar de golpear y huir, y acudir a la operación de pequeños grupos que utilizan el sabotaje y el terrorismo. Esto, en resumen, es lo que

Desafíos, Bogotá (Colombia), (10): 155-168, semestre I de 2004

los estudiosos de esta guerra irregular han denominado la *guerra de la pulga*.

¿Guerra civil o guerra contra la sociedad civil?

Frente a esta disyuntiva aparente, podemos decir que en varias de las expresiones regionales de la guerra interna se dan las características que internacionalmente llevan a calificar un conflicto interno como guerra civil; pero igualmente decimos que el enfrentamiento colombiano, así como muchas de las guerras contemporáneas, es fundamentalmente una guerra contra la sociedad civil, por cuanto el mayor número de sus víctimas es de la población no combatiente.

¿El Estado impotente contra la fragmentación de actores?

Tenemos que decir que nuestra guerra interna parece ser, como lo han señalado algunos analistas, el enfrentamiento entre un Estado débil e impotente para imponer el monopolio de la fuerza legítima y 'señores de la guerra' sumamente federalizados, con inmensos recursos económicos, y que pretenden invocar la representatividad de la sociedad civil para hacer su guerra.

¿Hacia una guerra de la coca?

La naturaleza del conflicto armado colombiano ha cambiado aceleradamente, desde una clásica guerra de resistencia campesina, hacia una de liberación nacional y más recientemente a una *guerra de la coca*, que expresa los rezagos de un problema agrario no resuelto, con todo lo que esto significa y las complejidades de una actividad económica ilegal globalizada, dentro de un orden (o ¿desorden?) global, en el cual la debilidad de muchos Estados parece impedirles desempeñar su rol de pivotes. Hablamos de una guerra de la coca en el siguiente triple sentido:

- El cultivo ilegal de la coca está suministrando a las organizaciones armadas, guerrilla (especialmente las FARC) y grupos de autodefensas o paramilitares, una base social de apoyo, dada por los cultivadores campesinos que de una u otra manera se ven obligados a subsistir de este modo.
- El cultivo de la coca y sus actividades asociadas —procesamiento, elaboración y tráfico— se han convertido en la principal fuente de financiación de los anteriores actores armados del conflicto, ya que suministran un volumen de recursos bastante generoso que permite la reproducción de la guerra.

▪ La lógica de la guerra, por las características mencionadas, se ha convertido en una que coloca la prioridad en el control territorial de las zonas en las cuales el cultivo de la coca es determinante en la economía territorial, pero no se trata, como en otras guerras irregulares, de zonas liberadas, sino de regiones en las cuales la guerrilla o los grupos de autodefensa o paramilitares actúan como el poder paralelo, y en esa medida logran captar las rentas provenientes de la actividad asociada con la coca para sus presupuestos de guerra.

Dentro de este control territorial desempeña un papel fundamental el desplazamiento de la población, con todas las consecuencias humanitarias que esto conlleva.

¿Se urbaniza el conflicto interno armado?

La violencia en Colombia ha sido una incómoda compañera de viaje de varias generaciones, y los movimientos poblacionales que han generado procesos de urbanización acelerados y desordenados no han estado ausentes de los inlujos de los fenómenos de violencia. Se dice, no sin razón, que cuando la población se mueve, está pasando algo. Y en la sociedad colombiana, la violencia es parte fundamental de ese algo que la está atravesando.

El conflicto político armado, desde sus orígenes, estuvo más situado en el mundo rural; sin embargo, el mundo urbano nunca estuvo ausente. Primero a través de las denominadas *redes urbanas* de apoyo a los núcleos combatientes rurales, con acciones esporádicas de tipo comando en lo urbano; posteriormente, con una nueva generación de grupos guerrilleros (M-19, ADO), con vocación y composición predominantemente urbana (a pesar de los intentos posteriores de creación de fuerzas guerrilleras rurales), que va a intentar desarrollar la denominada *guerra de guerrillas urbana*, siguiendo los casos de los Tupamaros, en Uruguay, y Montoneros, en Argentina, y que intenta una operatividad política-militar del tipo comando y la generación de corrientes de opinión pública a su favor.

Ahora estamos en el inicio de otro ciclo de violencia, que ha tomado la modalidad de las denominadas organizaciones milicianas, con ubicación predominante en sectores urbanos periféricos y marginales y en las cuales predomina no la acción tipo comando del pasado, sino la búsqueda progresiva de control territorial barrial a partir de procesos de inserción social más o menos consensuales o coercitivos. Se trata de trasladar al mundo urbano periférico la misma estrategia de control y dominio que se ensayó

Desafíos, Bogotá (Colombia), (10): 155-168, semestre I de 2004

en el mundo rural. Sin embargo, esto no significa que se está urbanizando el conflicto armado, sino combinar la acción de llenar el vacío de Estado en zonas periféricas con el recurso a acciones de terrorismo y sabotaje como parte de esta nueva fase de una guerra de desgaste, en la cual parecen estar empeñadas las organizaciones guerrilleras.

La participación de la ONU: un jalón más en la participación internacional en la paz colombiana

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, solicitó al secretario de la ONU una facilitación, con un mandato preciso, para buscar la reanudación de los diálogos con la guerrilla y estructurar así un nuevo proceso de paz desde otros presupuestos. Pero esta iniciativa se sitúa en un ya largo esfuerzo de internacionalización de la búsqueda de la paz colombiana.

Durante la administración de Julio César Turbay, en la negociación forzada que se dio para la liberación de los diplomáticos secuestrados en la embajada dominicana y que se puede considerar como precursora de los procesos de negociación, estuvo presente la comunidad inter-

nacional a través del embajador mexicano, que era uno de los cautivos, pero que actuaba al mismo tiempo como testigo de las conversaciones.

Con Belisario Betancur, si bien no hubo una presencia internacional relevante en relación con los procesos de conversaciones con las guerrillas, sí hubo un importante protagonismo internacional del Gobierno con la creación, junto con México, Venezuela y Panamá, del Grupo Contadora para la paz en Centroamérica, con el presupuesto que trabajar por apagar el incendio en la casa del vecino era una forma de prevenir el propio. Adicionalmente, el presidente Betancur se reunió en España con los jefes del M-19, y ese país actuó como huésped y facilitador de estos contactos.

En el gobierno de Virgilio Barco, que inició y desarrolló procesos de paz exitosos con varias organizaciones guerrilleras, no hubo en principio una presencia importante de la comunidad internacional, pero sí fue en la reunión de Panamá, entre miembros de la sociedad colombiana y el M-19 a propósito del secuestro de Álvaro Gómez, cuando se viabilizó el inicio de dichos procesos de paz.

Durante el cuatrienio de César Gaviria, la presencia internacional se intensifica no sólo en la función de garantes de los acuerdos con las distintas guerrillas que concluyeron los pro-

cesos de conversaciones, sino acudiendo a la figura de *países huéspedes* de conversaciones y de testigos internacionales, en los casos de Caracas y Tlaxcala entre el Gobierno y la coordinadora guerrillera.

En el gobierno de Ernesto Samper se facilitó la operación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia y se invitó a la Comisión de Encuesta para que participara en los acercamientos con el ELN. Posteriormente, el gobierno español facilitó y fue sede de la firma del Preacuerdo del Palacio de Viana, entre el gobierno y el ELN. Igualmente, el gobierno alemán y la Iglesia católica alemana desempeñaron un papel importante en la realización del Encuentro de Maguncia entre el ELN y miembros de la sociedad civil colombiana.

En la administración de Andrés Pastrana se dio un jalón importante a la internacionalización de la búsqueda de la paz con la *diplomacia para la paz* y, además, se creó la figura de los *grupos de países amigos* de los procesos con las FARC y el ELN. Se dio también la gira europea de los negociadores del Gobierno y las FARC y se realizaron con el ELN varias reuniones en Venezuela, Suiza y Cuba. Igualmente, el secretario de la ONU designó un asesor especial para ayudar a la búsqueda de la paz en Colombia.

Entonces, la propuesta del actual Gobierno hay que situarla dentro del esfuerzo de largo plazo, para buscar que la comunidad internacional ayude a encontrar los caminos que permitan superar definitivamente este conflicto interno armado. Ojalá la experiencia acumulada en los esfuerzos anteriores y la vivida en otras sociedades con conflictos similares permitan que se logre estructurar un serio proceso de conversaciones dentro del cual ese tercero neutral, que es la comunidad internacional, le dé seriedad y garantía de éxito.

La pretensión del actual Gobierno es que la ONU actúe como intermediario ante las FARC, y eventualmente ante el ELN, para desarrollar los primeros acercamientos y, sobre todo, para definir las bases de una nueva negociación; pero sigue siendo incierto cuál sería el mandato posterior que estaría dispuesto a darle a la ONU.

Hay que señalar que aun en la hipótesis probable de que las FARC acepten a la ONU como intermediario para los acercamientos, eso no es ninguna garantía de que vaya a ser fácil llegar a acuerdos acerca del procedimiento de la negociación y de su contenido, ni para el acuerdo humanitario planteado por sectores de la sociedad colombiana. Ahora bien, la viabilidad de una nueva negociación tiene que ver, por un lado, con la posi-

Desafíos, Bogotá (Colombia), (10): 155-168, semestre I de 2004

bilidad de aproximación entre las propuestas de las partes, en lo procedimental y en lo sustantivo, y, por otro, en los apoyos políticos que logre nacional e internacionalmente.

¿Se mueve lo político en la guerrilla?

El actual gobierno hizo hincapié en lo relativo al conflicto armado interno en la política de seguridad democrática, a fin de aumentar la capacidad coactiva del Estado, incrementar el control territorial, mejorar la seguridad de los ciudadanos y tratar de golpear las fuentes más importantes de financiación de los grupos armados irregulares, como mecanismo de forzarlos a ir hacia un proceso de negociación serio y de corto plazo. Asimismo, cambió el discurso en el sentido de considerar que no existe un conflicto interno armado, sino la presencia de 'grupos terroristas' que atacan a la sociedad y al Estado, y con ello se situó así en la corriente internacional de guerra contra el terrorismo, iniciada después del 11 de septiembre del 2001. Pero ha sido persistente en proponerle a la ONU un papel de facilitación, que a través de sus buenos oficios, ayude a diseñar las bases de un nuevo y creíble proceso de negociación.

No hay que olvidar que en el caso colombiano no se trata de un

conflicto simétrico entre dos fuerzas en igualdad de condiciones, sino del enfrentamiento de un Estado legítimo democrático —a pesar de las críticas que pueda tener esa democracia— con grupos irregulares alzados en armas.

Las guerrillas, por su parte, han acusado el cambio de la política estatal y han respondido con un repliegue, dentro de una política de conservación de fuerzas, que elude el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y que acude a acciones de sabotaje, terrorismo y hostigamientos esporádicos. Pareciera claro que su directriz actual no es intentar hacer operaciones militares de gran envergadura, en la medida en que la nueva estrategia de las Fuerzas Armadas ha mostrado ser eficaz para responder a estos intentos. Esto no significa que las fuerzas guerrilleras estén cerca de su derrota estratégica; por el contrario, todos los indicios muestran que se encuentran relativamente intactas, lo cual acusa por supuesto los golpes que ha venido dándole el Estado.

En los últimos tiempos han venido dándose síntomas de la preponderancia que la dimensión política del enfrentamiento puede tomar. Recordemos que se trata de un conflicto político y militar, y esto explica que el gobierno le haya pedido a la ONU sus buenos oficios, cosa que no haría ningún Estado si se tratara solamente de un grupo de delin-

cuentas comunes. Entre estos indicios podemos mencionar las comunicaciones de las FARC a los generales de la República, a los ex presidentes liberales, al Grupo de Río y al secretario de la ONU, en las cuales solicitan formalmente una reunión para que se escuche su punto de vista en relación con el conflicto; así como la invitación a la Iglesia católica a reunirse en una entrevista con uno de sus dirigentes, siempre y cuando lo haga a nombre propio. Igualmente, iniciativas del ELN con la Iglesia católica, con procesos regionales de diálogo y análisis de sus problemas y algunas entrevistas de sus dirigentes.

A pesar del escepticismo fundado existente en la sociedad colombiana frente a posibles nuevos diálogos, los anteriores movimientos políticos de las guerrillas podrían ser los preámbulos para matizar sus tradicionales posiciones, abrir la posibilidad y hacer viable un nuevo acercamiento en el mediano plazo. Las FARC podrían suavizar su reiterada posición de no aceptar a la ONU como facilitador, y esto le abriría posibilidades a las Naciones Unidas para actuar con un mandato de las dos partes en el diseño de nuevas condiciones para un proceso de paz; igualmente, en el caso del ELN, podría llevarlo a modificar su posición de no conversar con el actual Gobierno.

Si bien en lo discursivo Gobierno y guerrilla han planteado una

política de exclusión y descalificación mutua, hay que entenderla como parte de sus estrategias de guerra, a la cual parecen darle por el momento la mayor prioridad. Pero no debemos descartar que a mediano plazo estos pequeños y a veces imperceptibles cambios signifiquen que se van a mover en la dirección de la solución más racional a esta lucha armada interna: la superación negociada a través de un proceso serio, con objetivos claros y que tengan como final la terminación del enfrentamiento.

¿Unidad para la guerra o para la paz?

Las guerrillas colombianas, las actuales y las desmovilizadas en el pasado reciente, tienen una historia propia articulada con dinámicas y lógicas muy específicas, como lo mencionamos. Esto explica por qué cada una de ellas tiene una subcultura, una mirada del conflicto, una estrategia y una táctica particulares. Ahí está, probablemente, una de las razones que han dificultado procesos de unidad, tanto para la guerra como para la paz. Cada una reivindica su especificidad y su autonomía; sin embargo, paradójicamente, todos han expresado siempre su deseo de unidad.

Los alzados en armas colombianos han sido refractarios a actuar

Desafíos, Bogotá (Colombia), (10): 155-168, semestre I de 2004

de manera unificada y cuando se han dado experiencias de algún tipo de 'unidad', no han superado la coordinación. Ha existido, sin embargo, más unidad para la guerra que para la paz. En el pasado reciente hubo experiencias de acción militar conjunta, en la época de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y en otros intentos esporádicos. Igual unidad de acción se ha conocido en los últimos tiempos entre ELN y FARC para combatir lo que ellos consideran un enemigo común en determinadas regiones del país. En este contexto se debe analizar el comunicado conjunto expedido por los máximos organismos de dirección de las FARC y el ELN.

Se ha dado la tendencia a valorar a los protagonistas del conflicto interno armado, en la cual se les atribuye como pensamiento y estrategia lo que están deseando los analistas, es decir, tienden a 'pensar con el deseo', y eso en la valoración y diseño de estrategias para enfrentar una situación de esta naturaleza es grave. Se está olvidando lo que muchos analistas actuales y clásicos como Sun Tzu siempre recalcaron: hay que conocer la estrategia del adversario, pero eso no significa atribuirle al adversario la estrategia que nos imaginamos o deseamos. Porque allí hay una equivocación de fondo.

Las FARC y el ELN son organizaciones guerrilleras con intencio-

nalidad política, más allá de la presencia en su actuar de prácticas delincuenciales reprobables, que han utilizado todas las guerrillas en sus historias. Han tenido estrategias políticas y militares diferentes y desarrollos desiguales, pero coinciden en el objetivo estratégico: la victoria militar y política que les permita la toma del poder. Otra cosa diferente es que lo vayan a lograr o no. Pero esa coincidencia básica ha hecho que históricamente sean más los aspectos de proximidad que de distancia.

Lo destacable del pronunciamiento conjunto es que parecen avanzar hacia una mayor identidad política, con seguridad no para que se produzca una fusión, pero probablemente sí una alianza más sólida entre ellas. Seguramente va a fortalecer la unidad de acción en el terreno militar, que ya se viene dando de manera regionalmente diferenciada; pero lo importante sería que sirviera para fortalecer una política hacia la superación definitiva del conflicto, es decir, para las posibilidades de la paz, más allá de las descalificaciones que le hacen al actual Gobierno, que son parte de la guerra de propaganda que se utiliza de ambos lados. Ojalá esto sea el preludio para articular, a mediano plazo, un único proceso de negociación con las fuerzas guerrilleras y superar así el modelo de paz a destajo que caracterizó a las negociaciones anteriores y que

dejó resultados muy ambiguos para la terminación definitiva de la guerra. El gobierno debería comenzar a estructurar una estrategia de paz unificada frente al movimiento guerrillero.

Frente a un conflicto con dimensiones complejas y diversas, la respuesta del Estado debe serlo igualmente. Para hacer viable una nueva negociación a mediano plazo es básico fortalecer la institucionalidad del Estado, para que éstas sean legítimas por su origen, su funcionamiento y sus resultados. Hay que tener unas instituciones de representación popular incuestionables en su elección, que realmente representen la diversidad nacional y cuya actuación sea eficaz para todos; unas instituciones judiciales que sean garantes imparciales de las reglas del juego y que actúen de manera eficaz en la sanción a quienes las infrinjan, porque ellas son el presupuesto de base de la convivencia ciudadana, y unas instituciones militares y de policía respetuosas del poder civil democráticamente elegido, del Estado de derecho y eficaces en su acción. Igualmente, se requiere una institucionalidad económica que garantice políticas públicas eficaces para las mayorías nacionales y no solamente para la dinámica de la acumulación de capital privado.

Pero, del mismo modo, se necesita una voluntad reformista clara. Es de absoluta prioridad trabajar sobre tres temas socialmente problemáticos para coadyuvar a terminar el conflicto interno armado: (1) una reforma política democrática; (2) una política económica que reactive la economía y cree un ambiente de seguridad para los negocios, y (3) una política social que tenga en la lucha contra la pobreza y el desempleo los ejes centrales. Para viabilizar la paz negociada las reformas se deben hacer, ojalá, con el concurso de los compatriotas que hoy están fuera de la legalidad y que pretenden que los cambios pueden obtenerse a través de la violencia; pero igualmente hay que hacerlas, así ellos no quieran aportar sus ideas. De esta manera habrá el entorno político necesario para hacer viable una negociación exitosa del enfrentamiento interno.

El reto del Estado es actuar unitariamente, mantenerse dentro de su institucionalidad y fortalecerla respetando los derechos de los ciudadanos, para de esta manera ganar lo fundamental del enfrentamiento que es política, es decir, la legitimidad de la población colombiana, y decirle así a la guerrilla que no es posible soñar con victorias militares y que se debe trabajar por una negociación política seria y realista.

Desafíos, Bogotá (Colombia), (10): 155-168, semestre I de 2004